**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO**

EXPEDIENTE: SCM-JDC-101/2020

ACTOR: CARLOS CRUZ LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO

MAGISTRADO: JOSÉ LUIS CEBALLOS
DAZA

SECRETARIA: BEATRÍZ MEJÍA RUÍZ¹

Ciudad de México, a diecicoste de septiembre de dos mil veinte.

Esta Sala Regional, en sesión pública de esta fecha, resuelve **modificar** el acuerdo plenario impugnado, en razón de que el Tribunal local indebidamente **desechó de plano** la demanda primigenia, cuando debió asumir únicamente de manera formal el conocimiento del asunto y **confirmar** la resolución primigenia; en razón de lo siguiente:

GLOSARIO

Actor o Promovente	Carlos Cruz López, en carácter de diputado integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero
Resolución Impugnada	Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero con la clave de identificación TEE/JEC/010/2020 Y TEE/JEC/011/2020 ACUMULADO
Autoridad Responsable Tribunal Local	o Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
Comisión de Justicia	Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

¹ Con la colaboración de Javier Mendoza del Ángel.

	de Morena
Congreso del Estado	Congreso del Estado de Guerrero
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Grupo Parlamentario	Grupo parlamentario de MORENA
Juicio de la Ciudadanía	Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (y la ciudadana) previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Juicio Electoral	Juicio Electoral Ciudadano previsto en la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley de Medios Local	Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero
Ley Orgánica	Ley Orgánica del Congreso del Estado de Guerrero
Mesa Directiva	Mesa directiva de la LXII legislatura del Congreso del Estado de Guerrero
Reglamento Interno	Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Sala Regional:	Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANTECEDENTES

De las constancias que obran en el expediente, así como de los hechos narrados por el Actor en su demanda, y de una lectura integral de los mismos, esta Sala Regional advierte lo siguiente:

I. PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA EN EL CONGRESO DEL ESTADO

A). INSTALACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. El uno de septiembre de dos mil dieciocho, se instaló la Sexagésima Segunda Legislatura al Congreso del Estado, conformándose y registrándose a los y las integrantes de los respectivos grupos parlamentarios, entre ellos el de MORENA.

B). TOMA DE PROTESTA. El trece de diciembre de dos mil dieciocho, el Diputado Antonio Helguera Jiménez tomó protesta como coordinador del Grupo Parlamentario.

C). CONVOCATORIA. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el Diputado Antonio Helguera Jiménez convocó a una reunión plenaria programada para el diecisiete de enero de dos mil veinte, adjuntándose para tal efecto, orden del día que establecía como puntos a tratar: **a)** la revisión y aprobación del reglamento interno del Grupo Parlamentario; y **b)** la revaloración de la permanencia del que hasta entonces era el actual coordinador.

D). OFICIO DE INTENCIÓN. El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el Actor presentó oficio con la clave de identificación HCEG/LXII/CCL/154-1/2019, dirigido al Diputado Antonio Elguera Jiménez en su calidad de coordinador del Grupo Parlamentario, en el cual, expuso su intención de participar en el proceso de selección de la coordinación para el ejercicio legislativo dos mil veinte.

E). DESIGNACIÓN DE DIPUTADO COORDINADOR. El trece de enero de dos mil veinte², trece diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario dirigieron un oficio al Presidente de la Mesa Directiva

² Salvo disposición expresa, las fechas que se citen en lo subsecuente corresponden al año dos mil veinte.

en el que informaron la designación del diputado J. Jesús Villanueva Vega como nuevo coordinador, en sustitución del Diputado Antonio Helguera Jiménez.

F). TOMA DE PROTESTA. El catorce de enero, el Presidente de la Mesa Directiva dio lectura al oficio antes referido y de manera inmediata le tomó la protesta de ley al diputado J. Jesús Villanueva Vega como coordinador del Grupo Parlamentario.

II. RECURSO INTRAPARTIDISTA.

A). PRESENTACIÓN. El veinte de enero, el Actor y otros diputados y diputadas, presentaron ante la Comisión de Justicia recurso de queja por la indebida designación de J. Jesús Villanueva Vega como coordinador del Grupo Parlamentario, formándose los expedientes CNHJ-GRO-087/2020 y CNHJ-GRO-096/2020.

B). RESOLUCIÓN. El catorce de febrero, la Comisión de Justicia resolvió la queja, declarándola improcedente, al considerar que no tiene competencia para sustanciar los asuntos relacionados con las y los legisladores de cualquier ámbito, aun siendo militantes con afiliación de MORENA o que hubieran recibido su postulación a la candidatura por parte de tal partido.³

III. JUICIO LOCAL

A). DEMANDA. Inconforme con lo anterior, el veinte de febrero el Actor en su calidad de Diputado y otros diputados y diputadas presentaron ante el Tribunal Local escritos de Juicio Electoral contra la resolución dictada por la Comisión de Justicia, formándose los

³ Con sustento, principalmente, en lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-1878/2019.

expedientes TEE/JEC/010/2020 y TEE/JEC/011/2020
ACUMULADO.

B). RESOLUCIÓN. El ocho de julio, el Tribunal Local mediante resolución **desechó de plano** los juicios electorales, aduciendo que la materia de la controversia incide en el ámbito del Derecho Parlamentario, y que es inviable impugnarse a través del Juicio Electoral.

IV. JUICIO DE LA CIUDADANÍA.

A). DEMANDA. A fin de controvertir la determinación anterior, el catorce de julio, el Actor presentó ante el Tribunal Local, escrito de demanda de Juicio de la Ciudadanía.

El día diecisiete siguiente, fueron recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el citado escrito de demanda, el informe circunstanciado, la Resolución Impugnada y demás documentación relacionada con el medio de impugnación de mérito.

B) TURNO. Por acuerdo de diecisiete de julio, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente con la clave de identificación

SCM-JDC-101/2020, y turnarlo a Ponencia del Magistrado José Luis Ceballos Daza para la elaboración y presentación del proyecto de sentencia respectivo.

C). RADICACIÓN, ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. En su oportunidad el Magistrado Instructor radicó y admitió la demanda y finalmente, al considerar que se encontraba debidamente integrado el expediente y, al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, se cerró la instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional es competente *formalmente* para conocer y resolver el presente asunto, porque se trata de un juicio promovido por una persona, a fin de impugnar una resolución emitida por el Tribunal local, que al haber desechado su impugnación en la instancia primigenia, considera atentatoria a su derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo de diputado del Congreso Local de Guerrero; supuesto *formal* de competencia de esta Sala Regional y entidad federativa en la que ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Federal: artículos 41, párrafo tercero, Base VI; 99, párrafo cuarto, fracción V.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 195, fracción XI.

Ley de Medios: artículos 79 párrafo 1, 80 párrafo 1 inciso e), y 83 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo INE/CG329/2017⁴ de veinte de julio de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual aprobó el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y su ciudad cabecera.

Acuerdo General 3/2015⁵ de diez de marzo de dos mil quince, emitido por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación en el cual consideró competente a las Salas Regionales para conocer las controversias sobre el ejercicio de cargo y dietas de los cargos locales excepto de las gubernaturas.

⁴ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.

⁵ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil quince.

SEGUNDA. Condiciones normativas para la resolución del asunto.

Es un hecho notorio para esta Sala Regional, que a partir de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 conocida como COVID-19, la Sala Superior emitió el Acuerdo General 2/2020⁶ por el cual estableció **como medida extraordinaria y excepcional**, la celebración de sesiones *no presenciales* en que podrían resolverse entre otros, aquellos juicios que el Pleno así lo determinara según su naturaleza.

En el Acuerdo General 2/2020 se determinó, específicamente en el punto IV, que los asuntos que se considerarían como “urgentes” serían: *“... aquellos que se encuentren vinculados a algún proceso electoral en relación con términos perentorios, o bien, que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable, lo que deberá estar debidamente justificado en la sentencia...”*.

En ese mismo apartado, la Sala Superior determinó que también serían objeto de resolución, aquellos asuntos en que el Pleno respectivo determinara de manera fundada y motivada la pertinencia de resolverlos, si las medidas preventivas (sanitarias) se extendían en el tiempo.

Bajo ese contexto, la Sala Superior emitió el Acuerdo General 4/2020⁷ por el que se expidieron los Lineamientos aplicables para la

⁶ Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 (veintisiete) de marzo. Visible en la página electrónica oficial: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590681&fecha=27/03/2020

⁷ Acuerdo General 4/2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 (veintidós) de abril. Visible en la página electrónica oficial: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592109&fecha=22/04/2020.

resolución de los medios de impugnación a través del sistema de videoconferencias.

En dicho acuerdo se establecieron parámetros para la implementación de medios electrónicos -como videoconferencias- para la celebración de las sesiones no presenciales⁸.

Además, en el artículo transitorio Segundo de estos Lineamientos, la Sala Superior dispuso su obligatoriedad para las Salas Regionales y Especializada de este Tribunal.

En adición a tales previsiones, el primero de julio del presente año la Sala Superior emitió el Acuerdo General 6/2020⁹, mediante el cual extendió el catálogo de juicios susceptibles de ser resueltos en forma no presencial dado el contexto actual de emergencia sanitaria, incluyendo asuntos que involucren :

- a. Derechos de personas o comunidades indígenas.
- b. Violencia política por razones de género.
- c. Los que deriven de la reanudación gradual de actividades del Instituto Nacional Electoral.
- d. Derechos de personas en situación vulnerable.

En el caso, se estima necesario emitir la sentencia respectiva, ya que atento al contenido de los Acuerdos Generales 2/2020, 4/2020 y

⁸ En el numeral III del invocado Acuerdo General 4/2020 se reiteró que, entre otros, los asuntos urgentes se discutirían y resolverían en forma no presencial, entendiéndose estos como aquellos en los cuales existiera vinculación con algún proceso electoral y se relacionaran con términos perentorios, así como aquellos en donde se pudiera generar la posibilidad de algún daño irreparable, lo que, en su caso, debería justificarse en la sentencia respectiva.

En este mismo numeral la Sala Superior previó que serían objeto de resolución los asuntos en los que el Pleno determinara de manera fundada y motivada su pertinencia acorde con la situación sanitaria del país, debiéndose prever las medidas pertinentes para garantizar simultáneamente el acceso a la tutela judicial y el derecho a la salud de las personas.

⁹ Acuerdo General 6/2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 (trece) de julio. Visible en la página electrónica oficial: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596622&fecha=13/07/2020

6/2020 de la Sala Superior, ante la prolongación del actual estado de la contingencia sanitaria, es indispensable resolver este juicio para dar certeza jurídica y una definición sobre la situación que debe prevalecer, por las particularidades que se explicarán a continuación.

Ello, tomando en consideración, en principio, que el Tribunal Local que es la autoridad señalada como responsable de la emisión del Acuerdo Plenario impugnado, la cual, ha reanudado gradualmente sus actividades¹⁰.

Así, considerando que en el Acuerdo General 6/2020, la Sala Superior señaló que se podrían resolver los juicios que derivaran de la reanudación gradual de actividades del Instituto Nacional Electoral, esta Sala Regional estima que la razón subyacente en dicho criterio debe extenderse a los juicios en que estén involucradas las autoridades electorales locales de la circunscripción.

Ello, sin perder de vista el derecho a la salud u otros derechos que pueden estar en riesgo por el contexto de la emergencia sanitaria actual¹¹.

De ahí que, en consideración de esta Sala Regional, **se actualiza un supuesto para conocer y resolver** en este momento el presente asunto, al tratarse de un acuerdo emitido por el Tribunal Local, en el cual determinó desechar un medio de impugnación que se dirigió a controvertir la resolución de la Comisión de Justicia que relacionada con la designación de la coordinación del Grupo Parlamentario que era contraria a la pretensión del Actor quien

¹⁰ De acuerdo con el artículo 15 párrafo 1 de la Ley de Medios, ya que el Tribunal Local lo informó así a la Sala Regional mediante el oficio recibido el 7 (siete) de agosto.

¹¹ Ello, al ser un hecho notorio según el artículo 15 párrafo 1 de la Ley de Medios, el estado de pandemia mundial y la contingencia sanitaria por la que también atraviesa el país y la Ciudad de México.

señala que no se tomó en consideración su escrito de intención para participar en el proceso de elección de dicha coordinación, lo que desde su enfoque, se traduce en la vulneración de su derecho político-electoral de ser votado, vulneración que, en caso de tener razón el Actor, se extendería hasta que se resolviera este juicio.

En este sentido, se justifica que este asunto deba ser resuelto en este momento, a fin de brindar certeza y seguridad jurídica al Actor ya que en el caso, es indispensable establecer una definición concreta sobre su situación jurídica y así evitar que se genere algún acto irreparable en su perjuicio que pudiera transgredir sus derechos político-electorales en la vertiente de ser votado al interior de su partido.

Bajo tales parámetros, esta Sala Regional considera que existen las condiciones para la emisión de esta sentencia, en tanto este juicio se ubica en la hipótesis consistente en que se resolverían los asuntos que el Pleno de cada Sala determinara de manera fundada y motivada, lo que ha quedado razonado en los párrafos previos.

TERCERA. REQUISITOS DE PROCESALES

El medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia¹²:

A). FORMA. El Actor presentó por escrito su demanda, en ella hizo constar su nombre y firma autógrafa, señaló domicilio para recibir notificaciones, identificó el acto impugnado, expuso los hechos y agravios correspondientes y anexó las pruebas que estimó pertinentes.

B). OPORTUNIDAD. El medio de impugnación fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 8, de la Ley de Medios

¹² Lo anterior con fundamento en los artículos 4, 7, párrafo 1, 8, párrafo 1, 9, párrafo 1, 12, párrafo 1, incisos a) y b), 13, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley de Medios.

Lo anterior es así, ya que de las constancias que se encuentran en el expediente se advierte que el Actor tuvo conocimiento del acto impugnado el ocho de julio, en tal sentido el plazo de cuatro días que dispone la Ley de Medios transcurrió del nueve al catorce de julio de esta nulidad, sin contar los días once y doce de ese mes, por haber sido inhábiles al ser sábado y domingo¹³.

Por lo que, si la demanda se presentó ante esta Sala Regional, el catorce de julio siguiente, resulta inconcuso que se presentó dentro del plazo legal de cuatro días, toda vez que la controversia no se relaciona con algún proceso electoral que se esté desarrollando.

Sin que pase desapercibido para esta Sala Regional que la Autoridad Responsable en su informe circunstanciado no alude la extemporaneidad del medio de impugnación en comento.

C). LEGITIMACIÓN E INTERÉS JURÍDICO. El Actor cuenta con legitimación e interés jurídico para promover el presente juicio, ya que promueve por propio derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 párrafo primero inciso b) de la Ley de Medios, manifestando ser Diputado integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Congreso del Estado, alegando una posible vulneración a su esfera de derechos político-electorales al considerar que se viola su derecho a aspirar al cargo de coordinador del Grupo Parlamentario.

Lo anterior, aunado a que el Actor, junto con otras personas, promovió el juicio ante la instancia local; y, es la persona que sostiene que el Acuerdo Plenario le genera agravios.

¹³ En términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 7, de la Ley de Medios.

D). DEFINITIVIDAD. El presente requisito se cumple debido a que contra el acuerdo impugnado no existe alguna instancia que pueda ser agotada, antes de la presentación del presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 párrafo 2 de la Ley de Medios.

En consecuencia, al estar satisfechos los requisitos de procedencia del Juicio de la Ciudadanía y al no advertirse alguna causal de improcedencia, lo conducente es analizar los agravios expuestos por el Promovente.

CUARTA. CONTROVERSIA

A) CONTEXTO DE LA EMISIÓN DE LA IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA

La Comisión de Justicia recibió el escrito de queja presentada por el Actor el diecisiete de enero del año en curso, contra Aristóteles Tito Arroyo, Marco Antonio Cabada Artas, Perla Xóchitl García Silva, Blanca Celene Armenta Piza, Moisés Reyes Sandoval, Nilson Hilario Mendoza, Norma Otilia Hernandez Martínez, Maria García Guillen, Jesús Villanueva Vega, Luis Enrique Ríos Saucedo, Celeste Mora Euguiluz, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna y Arturo Martínez Núñez en su calidad de diputados y diputadas locales del Congreso del Estado, por la supuesta trasgresión a los documentos básicos de MORENA.

En el referido escrito las personas precisaron la siguiente pretensión:

Primero: Declare invalida la designación del Ciudadanado Diputado J.- Jesus Villanueva Vega, como Coordinador del Grupó Parlamenatario de MORENA de la XLII al H. Congreso del Estado de Guerrero

Segundo. Se emita una Convocatoria en el que en el orden del día, se considere la participación de todos y todas y que garantice que

mediante elección libre y Democrática se designe al Coordinador del Grupo Parlamentario de nuestro Instituto Político, ante la LXII Legislatura al H. Congreso del Estado de Guerrero; ante la Legislatura del H. Congreso.

Tercero. Que la Convocatoria en referencia, se considere en el registro como aspirantes a coordinador de Grupo Parlamentario exclusivamente a las y los diputados que se encuentren debidamente AFILIADOS A MORENA, por las razones que en la presente queja se expondrán

Cuarto. Se exhorte a través de la presente Comisión a que nuestro Grupo Parlamentario a la brevedad posible, revise y apruebe el reglamento interno de la fracción.

Así, la Comisión de Justicia identificó como acto reclamado **la ilegal designación y toma de protesta del Diputado J. Jesús Villanueva Vega como nuevo coordinador del Grupo Parlamentario.**

En ese sentido, la Comisión de Justicia determinó improcedente el recurso de queja, al considerar que carecía de competencia formal y material para conocer y resolver de aquellos asuntos relacionados con el Derecho Parlamentario como son los actos emitidos por los grupos parlamentarios conforme a los precedentes de la Sala Superior SUP-JDC-1212/2019 y SUP-JDC-1878/2019.

B) CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL LOCAL

El Tribunal Local mediante acuerdo plenario determinó **desechar de plano** la demanda del Actor y de otras personas, al estimar que se actualizaba lo dispuesto en el artículo 14, fracción I, en relación con el 97, de la Ley de Medios Local.

Como puede verse de su determinación, en el capítulo de competencia precisó de manera expresa: *Este Tribunal Electoral del Estado, es competente para conocer y resolver los medios de impugnación al rubro indicado, por tratarse de juicios electorales ciudadanos por medio de los cuales controvierten una resolución del órgano nacional de justicia partidista que declara improcedentes los recursos de queja, interpuestos en contra la designación mayoritai, del nuevo coordinador del grupo parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado de Guerrero.*

Así, puede apreciarse que el tribunal local no hizo acotación alguna en torno a si el reconocimiento de su competencia era “formal” o bien, evidenciaba que le asistía incluso una competencia material para conocer del asunto.

Con motivo de lo anterior, el tribunal procedió a un estudio que le llevó a examinar si el acto reclamado era viable de ser impugnado en alguno de los medios previstos en la materia electoral, particularmente en el Juicio Ciudadano Electoral.

De ese modo, arribó a la conclusión de que en el caso concreto, el acto reclamado tenía su origen en el Derecho Parlamentario y no en la vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía o de militancia partidista.

Al respecto, consideró que los motivos de reclamo del Actor tuvieron sustento en una indebida designación del nuevo coordinador del Grupo Parlamentario, tema que expuso, escapaba de la tutela del Juicio Electoral, como vía de impugnación para proteger y restituir a la ciudadanía en el uso y goce de sus derechos políticos electorales y de militancia partidista, a través de su protección legal y constitucional.

Asimismo, el Tribunal Local precisó que respecto al tema del Derecho Parlamentario, la Sala Superior, ha sostenido que este comprende el conjunto de normas que regulan las actividades internas de los órganos legislativos, la organización, funcionamiento, división de trabajo, desahogo de tareas, ejercicio de atribuciones, deberes y prerrogativas de sus integrantes, así como las relaciones entre los grupos políticos parlamentarios y la publicación de sus actos, acuerdos y determinaciones.¹⁴

De ahí que, el Tribunal Local consideró que la controversia planteada, al estar relacionada con el ámbito del Derecho Parlamentario administrativo incide en la integración, funcionamiento orgánico y administrativo del Congreso del Estado y no podía ser objeto de control a través del Juicio Electoral.

Precisó que la Sala Superior también ha dicho que, del amplio espectro del derecho político electoral de ser votado o votada quedan excluidos los actos políticos correspondientes al Derecho Parlamentario partidista, como es el caso de la organización interna de los grupos parlamentarios y la designación¹⁵ de la coordinación respectiva¹⁶, por tanto, esos actos no son objeto de control a través del Juicio Electoral, ya que están esencial y materialmente desvinculados de los elementos del derecho a ser votado o votada; **cuestión que en su perspectiva, le llevó al desechamiento de plano de la demanda.**

QUINTA. ESTUDIO DE FONDO

A) SÍNTESIS DE AGRAVIOS

¹⁴ Visibles en las resoluciones de los expedientes SUP-JDC-480/2018, SUP-JDC-228/14 y SUPJDC-995/2013.

¹⁶ Visible en la resolución del expediente SUP-JDC-144/2017, en el link de Internet <https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00144-2007.htm>

De la lectura integral de la demanda, se aprecian los conceptos de agravio que a continuación se exponen:

Designación de la Coordinación del Grupo Parlamentario en Guerrero.

El Actor refiere que el Tribunal Local desechó de manera incorrecta su demanda, al considerar que la materia de la controversia pertenece al Derecho Parlamentario, en virtud que el acto que se llevó a cabo, fue organizado entre ciudadanos, ciudadanas y militantes quienes en funciones de diputados y diputadas designaron a quien sería su representante ante el congreso -como persona coordinadora del Grupo Parlamentario- por lo que dicha actividad no puede ser considerada como un acto parlamentario, máxime que la misma se realizó mediante un escrito, sin que previo al acto se llevara a cabo convocatoria, asamblea, o procedimiento alguno.

En ese tenor, manifiesta que el Tribunal Local erróneamente consideró que no se vulneraban sus derechos político-electorales, ya que, en opinión del Actor, se trata de su derecho a ser votado, dado que el derecho que se reclama tiene como fundamento la situación jurídica de igualdad para ejercer de manera efectiva las funciones inherentes al cargo de diputado local que ostenta.

Refiere, que la Sala Superior de acuerdo con lo previsto en los artículos 35 fracción II, 41, Base I, y 70, de la Constitución Federal, ha sostenido que existen principios que trascienden al desarrollo de las funciones de las y los legisladores que pertenecen a un partido político, ya que deben desarrollarlas atendiendo a la plataforma política y la corriente ideológica del partido contenida en sus documentos básicos, sin que ello invada la esfera del poder legislativo.

Así, el Actor afirma que cualquier regulación desde el ámbito normativo interno partidista, que pretenda incidir en sus fracciones parlamentarias, al no existir una prohibición expresa, no implica un exceso al ejercicio de su competencia regulatoria, pues así lo ha considerado la Sala Superior.

En ese sentido, desde la perspectiva del Actor, si la queja que se presentó ante la Comisión de Justicia fue para denunciar la indebida designación de la coordinación del Grupo Parlamentario -ya que dicha designación se realizó sin procedimiento interno legal alguno-, en su opinión, debe entenderse como una infracción partidista respecto a la forma de organización que deben adoptar las Diputadas y los Diputados emanados de un partido con prácticas democráticas y que dentro de esas prácticas se deben respetar a quienes aspiran a realizar las referidas tareas en el Congreso del Estado.

También manifiesta que del ordenamiento del Poder Legislativo del Estado de Guerrero [Ley Orgánica del Congreso local] se advierte que, los diputados y diputadas de la misma filiación o militancia del partido pueden constituir un solo Grupo Parlamentario, que para tal efecto se tendrán por constituidos cuando presenten a la Mesa Directiva el acta en la que conste la decisión de sus integrantes como Grupo Parlamentario y el nombre del Diputado o Diputada que haya sido electo o electa en la coordinación.

Asimismo, refiere que en tal ordenamiento no alude a que únicamente debe ser aprobado por una fracción parlamentaria, sino por la totalidad de sus integrantes.

De ahí que, para el Actor, el hecho de que a través de un simple oficio se notificara la determinación de nombrar un nuevo coordinador parlamentario, vulnera su derecho para aspirar a tal

cargo, contrariamente a lo sostenido por el Tribunal local y la Comisión de Justicia.

Falta de protección de sus derechos político-electorales con el carácter de afiliado del Morena

Por otra parte, el Actor en sus motivos de inconformidad precisa que, la improcedencia decretada por el Tribunal local le genera afectación a sus derechos políticos-electorales como militante de Morena, dado que no se sabe con exactitud quiénes fueron las personas que participaron en la elección de la coordinación del Grupo Parlamentario, por lo que carece de certeza jurídica respecto a la misma, dada la falta de convocatoria y plenaria que haya sustentado el acto que derivó en la designación de tal persona. En ese sentido aduce que todo partido político debe apegarse a sus ordenamientos internos así como al principio de legalidad, lo cual en el caso no aconteció, al no revisarse dicho nombramiento.

B) MATERIA DE LA CONTROVERSIA

Determinar por una parte, si fue correcto que el Tribunal Local asumiera una **competencia formal y material** para el conocimiento de la resolución impugnada, o bien, debía haber acotado que el reconocimiento de su competencia era meramente formal.

Y en segundo lugar, determinar si fue acertado que desechara su demanda bajo la consideración de que la materia del acto combatido incidía o estaba inmersa en el ámbito del Derecho Parlamentario, o en su caso, si como lo sostenía la Parte Actora la impugnación estaba relacionada con el estudio de si los actos impugnados originalmente implicaban o podían implicar una afectación a derechos político-electorales, lo cual habría de realizar el Tribunal Local, necesariamente, en un estudio de fondo y no como una causal de improcedencia y, a decir del Actor, debería declarar que

sus derechos político-electorales habían sido transgredidos con el proceso de designación de la coordinación del Grupo Parlamentario.

C) MARCO JURÍDICO-CONCEPTUAL

Para estar en posibilidad de analizar los agravios precisados con anterioridad, es preciso señalar que esta Sala Regional estima que para determinar **si un acto (en sentido amplio) corresponde o no a la materia electoral, es necesario que su contenido sea electoral o verse sobre derechos político-electores**, ya que en esos supuestos la norma o acto pueden estar sujetos a esa jurisdicción, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones, más allá de si la norma reclamada está contenida formalmente en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral o esto se desprenda de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda¹⁷.

Por su parte, en los artículos 41 base VI, 99 párrafo 4 de la Constitución Federal, establecen que el sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene como finalidad -esencialmente- garantizar la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de votar, ser votada, de asociación o afiliación.

En cuanto al ejercicio del derecho de ser votado o votada, la Sala Superior ha precisado algunos de sus alcances; por ejemplo:

¹⁷ Conforme al texto de la tesis aislada P. LX/2008 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro **AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS**, consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 5.

a) incluye el derecho a ocupar y desempeñar el cargo¹⁸; b) la remuneración de las y los servidores públicos que desempeñan cargos de elección popular también están incluidas¹⁹, y c) el acoso laboral, como un impedimento a éste²⁰.

No obstante lo anterior, no todos los actos tienen una vinculación ni inciden directamente en el ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser votado o votada.

En este sentido, la Sala Superior ha establecido diversos criterios de los cuales se puede deducir qué actos corresponden al ámbito del Derecho Parlamentario, y que, por ende, no corresponden a la materia electoral.

En ese tenor, la Sala Superior²¹ ha razonado que el Derecho Parlamentario abarca el conjunto de normas que regulan las actividades internas de los órganos legislativos, la organización, funcionamiento, división de trabajo, desahogo de tareas, ejercicio de atribuciones, deberes, privilegios de sus integrantes, así como las relaciones entre los grupos políticos parlamentarios y la integración de los órganos internos de la propia Legislatura.

Por lo señalado, el derecho de ser votado o votada no alcanza otros aspectos que no sean connaturales al cargo ni se refiere a

¹⁸ Conforme a la jurisprudencia 20/2010 de rubro **DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO**, consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19.

¹⁹ Conforme a la jurisprudencia 21/2011 de rubro **CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)**, consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 13 y 14.

²⁰ Conforme a la tesis LXXXV/2016 de rubro **ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL EJERCICIO DEL CARGO, CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO ELECTORAL**, consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 54 y 55.

²¹ Véase la sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-29/2013.

situaciones jurídicas derivadas o indirectas de las funciones materiales desempeñadas, ya que se **excluyen de la tutela en materia electoral los actos políticos correspondientes al Derecho Parlamentario**, como los concernientes a la actuación y organización interna de los órganos legislativos; ello, conforme a la jurisprudencia **34/2013** de rubro: **“DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO PARLAMENTARIO²²”**.

Con base en lo anterior, ha definido como criterios de Derecho Parlamentario los siguientes²³:

a) La remoción de quienes desempeñan las coordinaciones parlamentarias no es impugnabile a través del Juicio de la Ciudadanía²⁴; b) Integración de comisiones legislativas²⁵, porque no involucra aspectos relacionados directa e inmediatamente con el derecho político electoral de recibir el voto; **c) La integración de la mesa directiva y diputación permanente²⁶**, ya que, constituye un proceso que se inscribe dentro del funcionamiento orgánico y administrativo del cuerpo legislativo, por lo que pertenecer al ámbito del Derecho Parlamentario; **d) Declaración de procedencia de la acción penal contra un diputado o diputada local²⁷; e) Acuerdos legislativos para integrar la junta de gobierno, grupos y fracciones parlamentarias, así como comisiones legislativas**

²² Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 6, Número 13, 2013, páginas 36, 37 y 38.

²³ Lo que se delinea en el Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-1212/2019.

²⁴ Tesis XIV/2007. **JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. LA REMOCIÓN DEL COORDINADOR DE UNA FRACCIÓN PARLAMENTARIA NO ES IMPUGNABLE** (LEGISLACIÓN DE CAMPECHE). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 79 a 81.

²⁵ Jurisprudencia 44/2014. **COMISIONES LEGISLATIVAS. SU INTEGRACIÓN SE REGULA POR EL DERECHO PARLAMENTARIO**. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 18 y 19.

²⁶ Sentencia emitida en los expedientes SUP-JDC-780/2015 y acumulados.

²⁷ Sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-765/2015.

(Congresos de Coahuila²⁸, Tabasco²⁹, Puebla³⁰, Senado de la República³¹); f) Improcedencia de la solicitud de un diputado o diputada local de integrarse a un grupo parlamentario distinto al del partido político que le postuló en la respectiva elección (Congreso de Campeche)³²; g) Modificaciones al estatuto de un grupo parlamentario³³.

ANALISIS DE LOS AGRAVIOS

CASO CONCRETO

En consideración de esta Sala Regional lo agravios resultan **parcialmente fundados** y suficientes para **modificar** la resolución impugnada en razón de lo siguiente:

Del análisis realizado, se observa que el Tribunal Local previo a proceder al examen de la procedencia del medio de impugnación y particularmente, en el capítulo relacionado con la competencia, debió acotar que en realidad le asistía una **competencia formal**, precisamente para no asumir de manera anticipada un conocimiento material del asunto, lo anterior sobre todo, porque precisamente como lo explicó en la parte subsecuente de su determinación el origen del mismo incidía en el ámbito parlamentario y por tanto, era ajeno a la jurisdicción electoral.

De haberlo realizado así, habría permitido su conocimiento de fondo del asunto y no establecer el desechamiento de la demanda con motivo de lo que, para su juicio, terminó siendo la actualización de una cuestión de improcedencia que como se evidencia de la propia

²⁸ Sentencia emitida en los expedientes SUP-JDC-745/2015 y acumulados.

²⁹ Sentencias emitidas en los siguientes expedientes: SUP-JDC-89/2013 y SUP-JRC-7/2013

³⁰ Sentencia correspondiente a los Juicios de la Ciudadanía SUP-JDC-67/2008 y acumulados.

³¹ Sentencia del Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-1711/2016.

³² Sentencia emitida en el Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-2817/2014.

³³ Sentencia emitida en el Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-995/2013.

resolución impugnada, son razones que están íntimamente relacionadas con el estudio de los agravios del Actor en aquella instancia, es decir, con determinar si la decisión de la Comisión de Justicia de declarar que la controversia era materia del Derecho Parlamentario, vulneraba o no, los derechos político-electorales del Actor.

Así, es patente que el tribunal local debió efectuar un examen de fondo que le habría permitido estudiar integralmente lo aducido por el actor en la instancia jurisdiccional local.

No obstante lo **fundado del agravio**, el mismo no tiene el alcance para revocar la sentencia del Tribunal local ni dejar sin efectos la determinación emitida por la Comisión de Justicia, porque como se se explica enseguida, los razonamientos que vertió el Tribunal Local, fueron acertados en la parte específica de sus consideraciones en las que dispuso que el origen del asunto incidía y estaba inmerso en el orden parlamentario, lo que le debió llevar a **confirmar la resolución originalmente reclamada**.

En ese sentido, es de señalar que la Sala Superior ha sido enfática, en sostener en diversas resoluciones, respecto al derecho parlamentario administrativo, que comprende el conjunto de normas que regulan las actividades internas de los órganos legislativos, la organización, funcionamiento, división de trabajo, desahogo de tareas, ejercicio de atribuciones, deberes y prerrogativas de sus integrantes, así como las relaciones entre los grupos políticos parlamentarios y la publicación de sus actos, acuerdos y determinaciones³⁴.

³⁴ SUP-JDC-176/2017 y acumulado.

Es decir, esta Sala Regional considera que las conductas derivadas del acto concreto de origen -designación o nombramiento de la Coordinación Parlamentaria de MORENA-, surgió en torno a la actuación y organización interna del Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado y de la decisión de las personas titulares de las diputaciones con dicha afiliación partidista; cuestiones que son ajenas al umbral de protección de la materia electoral, quedando circunscritos únicamente dentro del espectro del derecho parlamentario.

Por esas razones, esta Sala Regional estima que lo impugnado por el Actor –al no encontrarse vinculado a la defensa de derechos de naturaleza electoral- no podía analizarse a través de la jurisdicción electoral, lo anterior porque las distinciones destacadas, dejan claro que la inconformidad sostenida no lesiona o produce afectación a sus derechos políticos, como el de votar o ser votado en sus vertientes de afiliación o de acceso al cargo de elección popular, mismo que se agota precisamente, en el establecimiento y garantía de esas condiciones de igualdad para ocupar el cargo y para el ejercicio de la función pública correspondiente. Por tanto, no se refiere a situaciones jurídicas derivadas de las funciones materiales desempeñadas por el servidor público.

Tal circunstancia lo que evidencia es que, las manifestaciones del Actor gravitan en torno a la actuación y organización interna del Grupo Parlamentario, cuestiones que se reitera no forman parte de la protección que comprende los derechos político electorales y en consecuencia del derecho electoral.

Por esa razón, al realizar el ejercicio interpretativo del asunto sometido a estudio, puede determinarse que el sentido del medio de impugnación impuesto, no se encuentra vinculado a la defensa de derechos de naturaleza electoral, sino de tipo parlamentario.

Para robustecer lo anterior, se destaca que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231 establece lo siguiente:

ARTÍCULO 157. Los Grupos y las Representaciones Parlamentarias deberán informar a la Mesa Directiva dentro de la primera semana posterior a la instalación de la Legislatura, su constitución o carácter.

Los Grupos Parlamentarios y las Representaciones Parlamentarias, se tendrán por constituidas cuando presenten a la Mesa Directiva del Congreso, los siguientes documentos:

I. Acta en la que conste la decisión de sus integrantes de constituirse en Grupo o Representación y la lista de sus integrantes, y

II. Nombre del Diputado que haya sido designado como Coordinador del Grupo o Representante Parlamentario, así como el de quien desempeñe otras actividades directivas. En caso de cualquier controversia relativa a la aplicación de este Artículo, será determinada por sus normas internas.

Hecha del conocimiento del Pleno la información citada en el párrafo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva hará la Declaratoria de Constitución, Conformación y elección de Coordinador de los Grupos; en el caso del o los Diputados que no hayan manifestado su integración o carácter, serán declarados Diputado Sin Partido. Asimismo ordenará el registro correspondiente y la publicación en el Portal Oficial.

No se podrán formar Grupos o Representaciones Parlamentarias después de haberse formulado la declaratoria correspondiente por parte del Presidente de la Mesa Directiva. Los Grupos y Representaciones Parlamentarias que por cualquier causa dejen de tener el mínimo de integrantes que establece esta Ley Orgánica se consideran disueltos para todos los efectos legales y reglamentarios.

ARTÍCULO 159. Durante el ejercicio de la Legislatura, los Coordinadores de los Grupos y Representantes Parlamentarios, según sea el caso, comunicarán al Presidente de la Mesa Directiva, las modificaciones que ocurran en la integración de su Grupo o en el carácter de la Representación, mismas que deberán hacerse del conocimiento del Pleno y de la Junta de Coordinación, publicarlas en el Portal Oficial.

De esta forma, es posible concluir que los grupos parlamentarios y representaciones parlamentarias de los distintos partidos políticos que conforman la Cámara de Diputados (y Diputadas) en la entidad federativa precisada, se tendrán por constituidas cuando presenten a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, entre otras cuestiones, el nombre de la persona que haya sido designada en la coordinación del Grupo Parlamentario

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la elección de la coordinación del Grupo Parlamentario así como los actos reclamados vinculados con el mismo, no son susceptibles de afectar los derechos político-electorales de la ciudadanía, sino que se relacionan con la forma de organización que adoptan las personas militantes afiliadas a un mismo partido político o quienes integren dicho grupo al interior del Congreso del Estado, y cuya persona coordinadora les representará para todos los efectos legales, en ejercicio de las prerrogativas y derechos que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231 otorga en su artículo 23 a los grupos parlamentarios, lo cual no constituye una hipótesis de procedibilidad para el juicio electoral de la ciudadanía.

Por lo explicado con anterioridad, devienen inoperantes los diversos agravios tendientes a cuestionar la legalidad del procedimiento electivo de la coordinación del Grupo Parlamentario, aun cuando el actor los trate de vincular a la afectación de derechos político-electorales como militante de dicho partido político; sin embargo, sus

planteamientos como se ha dicho, están orientados a cuestionar un proceso de naturaleza netamente parlamentaria, en efecto, no pueden ser objeto de análisis desde el ámbito o jurisdicción electoral, lo que debió considerar el tribunal responsable y por tanto confirmar la resolución intrapartidista que se impugnaba.

En el mismo sentido, no es dable acoger el argumento del Actor en el sentido de que se dio una falta de certeza en la designación de la coordinación del Grupo Parlamentario, para lo cual expuso que no existió una convocatoria o actuación plenaria previa al interior de MORENA, y que afirma trasciende o afecta sus derechos partidistas.

En cuanto a ese punto, es de considerar que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero en su artículo 117, fracción II, establece que los grupos y representaciones parlamentarias, **forman parte de la organización del Congreso del Estado**, para el conocimiento, análisis y resolución de los asuntos de su competencia.

Por su parte, el artículo 145, del referido ordenamiento legislativo, establece que la Junta de Coordinación Política, es la expresión de la diversidad política y pluralidad ideológica que compone la Legislatura al Congreso del Estado, que funge **como órgano de coordinación a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas, administrativas y en general de todas aquellas que se estimen necesarias para la buena marcha del Congreso del Estado.**

Así, el artículo 146 de la misma ley establece que la Junta de Coordinación Política **la integrarán las diputadas y diputados coordinadores de los grupos parlamentarios**, quienes gozarán de voz y adoptarán sus decisiones por consenso, y en caso de no alcanzarlo, las diputadas y diputados que la integran resolverán

mediante el sistema de voto ponderado, conforme al cual cada integrante representará tantos votos como diputaciones tenga su grupo parlamentario.

De lo anterior, se advierte que las coordinaciones de los grupos parlamentarios integran la Junta de Coordinación Política, la cual funge como órgano de coordinación a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas, administrativas y en general de todas aquellas que se estimen necesarias para la buena marcha del Congreso del Estado.

Se robustece lo anterior, con la tesis **XIV/2007** de rubro **JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. LA REMOCIÓN DEL COORDINADOR DE UNA FRACCIÓN PARLAMENTARIA NO ES IMPUGNABLE (LEGISLACIÓN DE CAMPECHE)**, la cual establece en esencia que la remoción de la coordinación de una fracción parlamentaria que efectúe su partido político, no es objeto de control en la materia electoral, porque tal cargo pertenece al ámbito del derecho parlamentario, dado que el derecho que tienen los y las militantes es el de participar en la dirección del partido, el cual no se ve afectado con la remoción de una coordinación parlamentaria.

En razón de lo anteriormente explicado, aun cuando se ha determinado **parcialmente fundado** el agravio, en la medida de que debió asumirse un conocimiento formal del asunto y por tanto, proceder a su estudio de fondo, lo cierto es que la revocación del desechamiento de plano en el caso particular, solo tiene el alcance para **modificar** la sentencia impugnada y que prevalezcan las razones antes explicadas, que llevan a la necesaria conclusión de que el origen del asunto es eminentemente parlamentario.

Lo anterior, porque aun ante esa circunstancia no sería dable acoger la pretensión principal, relativa a que en que la sede partidista o bien en la jurisdiccional -Tribunal Local- tenía que analizarse la designación de la coordinación del Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado.

Es así, porque en efecto, dicha impugnación está necesariamente inmersa en el ámbito del Derecho Parlamentario, motivo por lo cual, deberán prevalecer las consideraciones expresadas en el contexto de la presente determinación.

Por ende, dadas las consideraciones advertidas, lo conducente es modificar el Acuerdo impugnado para que prevalezcan las consideraciones expresadas en la presente resolución.

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional

RESUELVE

ÚNICO. Se **modifica** la resolución impugnada en los términos que se precisan en la presente resolución.

NOTIFÍQUESE por correo electrónico al Tribunal Local y **por estrados** al Actor y a las demás personas interesadas; asimismo informese via correo electrónico a la Sala Superior en atención al Acuerdo General 3/2015.

Devuélvase la documentación que corresponda y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos, la Magistrada y los Magistrados, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se emitan con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral³⁵.

³⁵ Conforme al segundo transitorio del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral.